CORE
FUNDACIÓN CONFLICT RESPONSES

El proceso de paz, el Acuerdo y la inseguridad: ¿Puro fracaso?

La evolución en cifras de la violencia antes, durante y después del Acuerdo de Paz de 2016



CORE investiga y hace periodismo de investigación sobre conflicto armado y construcción de paz en Colombia. Le apostamos a mejorar la comprensión de las dinámicas de conflicto, la violencia y el posconflicto; a incidir, basados en evidencia, en mejores políticas públicas y acciones eficientes a favor de la paz; y a contribuir a combatir la desinformación sobre estos temas.

Autor:
Kyle Johnson
Editores:
Ángela Gómez, Santiago Rodríguez

Bogotá, D.C. Colombia
Noviembre 2026



Introducción

Las negociaciones y el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) tenían varios objetivos: ponerle fin al conflicto armado con el grupo guerrillero más grande y viejo del hemisferio; resolver algunas de las causas tanto originarias de la guerra, como la falta de presencia estatal, la desigualdad rural y un sistema político aún parcialmente cerrado, como otras que la mantuvieron viva por tantos años, como el narcotráfico y la economía de la coca; y cumplir con los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Pretendía lograr la paz negativa —acabar con la violencia— y, al menos parcialmente, la positiva —resolver varias causas más estructurales que promovían la guerra.

Desde poco después de su firma en noviembre del 2016, la violencia que buscaba acabar ha venido empeorando en varios sentidos, lo cual es un reflejo de que hemos entrado en un nuevo ciclo de violencia, distinto al que se vivió hasta el Acuerdo de Paz, según CORE y muchos analistas. Esta nueva dinámica tiene varias explicaciones, que se analizarán más adelante.

La nueva situación de violencia ha servido como la base del argumento del gobierno actual —e incluso de algunos funcionarios del gobierno anterior— de que el Acuerdo de Paz "no es un modelo" de seguir o incluso que es la causa de la situación de conflicto armado que se vive hoy en día en el país. El gobierno de De La Espriella ha argumentado ya dos veces frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su oposición al Acuerdo porque lo culpa de la violencia que existe actualmente.

Esta posición propone que el Acuerdo ha fracasado en su promesa de traer la paz. También va un poco más allá al implicar que este tiene la culpa de la situación en que estamos.

Este argumento tiene dos problemas. El primero es lógico: para que el Acuerdo haya fallado en traer paz, tiene que haberse implementado adecuadamente, lo cual, simplemente, no ha pasado. La promesa era que *al implementarse*, contribuiría a superar varias condiciones vinculadas al origen y la continuidad de la guerra. Pero dejar la mayor parte en el papel, sin llevarla a la realidad, no iba a traer la paz nunca, y es, en efecto, lo que ha ocurrido.

Este texto abordará el segundo problema del argumento: la violencia. Aunque reconocemos que no fue el único fin de lo pactado, acabar con la violencia es una meta necesaria de cualquier esfuerzo de paz. En el caso de Colombia, aunque el gobierno de Santos promovía la idea de que el Acuerdo terminaría el conflicto armado, el hecho de que optó por negociar aparte con el ELN y el Clan del

Golfo al tiempo indica que llegar a la paz con las FARC-EP no iba a acabar con todo el conflicto armado en el país.

Sin embargo, como el análisis de este informe mostrará, el proceso de negociación en sí fue efectivo en disminuir la violencia según varios indicadores. Muchos de estos ya venían disminuyendo desde años anteriores; la negociación sirvió como una nueva causa de la tendencia a la baja, y después de la firma del Acuerdo, el país registraba niveles históricamente bajos en términos de violencia; niveles que no se veían desde antes de la intensificación de la violencia en los años 80 o 90.

En este sentido, la negociación de paz sirvió para consolidar —aún más— disminuciones ya existentes en términos de violencia y entregar al país en el momento de la firma del Acuerdo una Colombia que había avanzado increíblemente en su camino hacia el final de la guerra. Por ejemplo, las víctimas de minas antipersonales y municiones sin explotar bajaron casi el 85 por ciento entre 2012 y 2016, cuando empezaron y terminaron las negociaciones; en el mismo periodo, la cantidad de soldados y Policías asesinados y heridos en servicio decrementaron en un 69 y 47 por ciento, respectivamente. Otros indicadores siguieron esta misma tendencia.

La tarea del gobierno de Santos, en sus últimos 18 meses, y de los siguientes era consolidar permanentemente esos avances, tarea que correspondía a la implementación del Acuerdo de Paz igual que a diferentes políticas complementarias importantes.

Las dinámicas cuantitativas de la violencia presentadas a continuación señalan unas ideas importantes, dado el contexto de paz y seguridad en los últimos 10 años en Colombia. En primer lugar, recuerda que un proceso de negociación puede disminuir la violencia y también llegar a la paz —no hay que limitarse al uno o al otro.

En segundo lugar, destacan los avances que Colombia ha hecho en los últimos 25 años frente a la violencia. Esto a su vez nos recuerda que, en este momento, tenemos problemas muy serios —algunos dirían crisis— en términos de seguridad, pero que estamos mucho mejor aún que hace 25 años, en el peor momento de la guerra.

Eso dicho, no es ideal usar como criterio de cómo vamos, los niveles más altos de la violencia. Más bien, puede ser mejor comparar con el comienzo de las negociaciones, en 2012. Frente a ese punto de partida, hay varios indicadores en los que, seguimos mejores hoy en día; con otros, lo ganado se ha perdido. De todas formas, lo preocupante de la situación actual es que las tendencias en casi todos los indicadores hasta 2025, al menos, han empeorado.

En tercer lugar, las cifras suman evidencia contraria al argumento de que el Acuerdo de 2016 no es un modelo para el mundo. Agrega un nuevo elemento frente a las críticas de lo pactado: el proceso en sí también sirvió para disminuir la violencia. A menudo la discusión gira alrededor del papel del

Acuerdo frente a la violencia después de su firma, pero se ignora su influencia sobre esta durante su propia negociación.

Las dinámicas a las que nos hemos referido hasta ahora tienen que ver con seis indicadores principales de la violencia con las FARC-EP de los cuales existen cifras confiables desde hace, al menos, 20 años: el secuestro, las masacres[1], el desplazamiento forzado, las víctimas de minas antipersonales (MAP) y de municiones sin explotar (MUSE), los miembros de la Fuerza Pública asesinados en servicios y los miembros de esta heridos en servicio. La temporalidad de estos indicadores cambia según los datos disponibles, pero se evidencian con todos claramente las tendencias previas a las negociaciones, las durante estas y las que han existido desde la firma.

Evolución de los indicadores y cifras de seguridad

En esta sección se analizarán las cifras de los diferentes indicadores previamente mencionados. Se verá que en todos los casos, ya se venía disminuyendo antes de las negociaciones, cuando siguieron ese camino para luego llegar a sus puntos más bajos en décadas antes de la firma de lo pactado. Estas dinámicas dan apoyo al argumento de que el proceso de negociación en sí sirvió para mejorar las condiciones de seguridad del país.

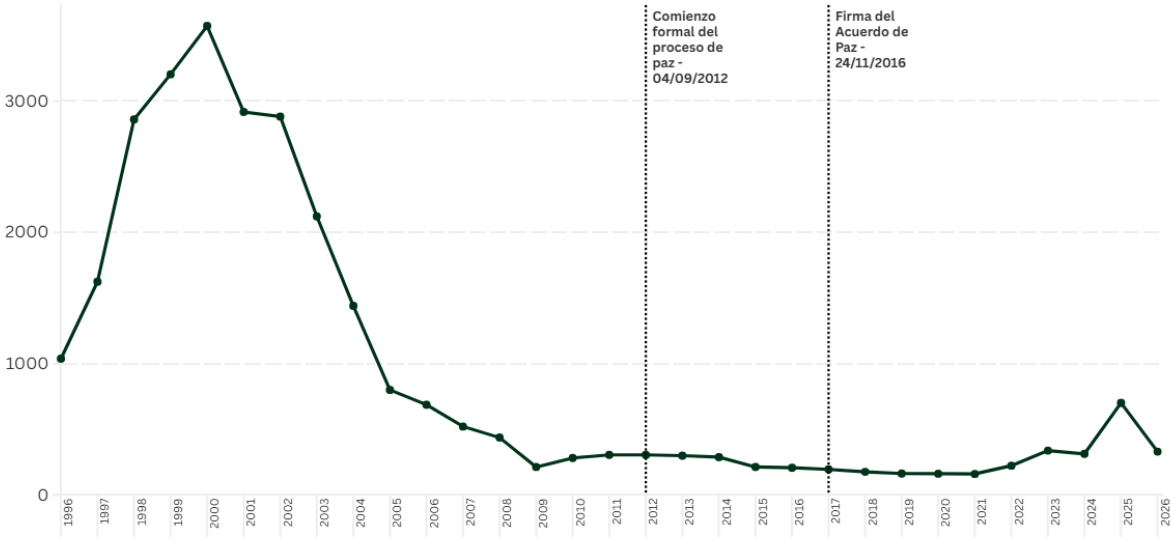
Secuestro

Las FARC-EP lograron convertir al secuestro en una "industria", especialmente con las pescas milagrosas en numerosas carreteras del país. Las cifras estatales muestran el efecto de la implementación de esta estrategia por parte de la guerrilla, mostrando un aumento sostenido hasta el 2000.

En el gobierno de Uribe (2002-2010), previo a las negociaciones de paz, la estrategia de seguridad se enfocó, en parte, en eliminar la injerencia de la guerrilla en las principales carreteras del país, lo cual efectivamente se logró en pocos años. Esto llevó a que las cifras de este crimen disminuyeran a 213 en 2009. Esta dinámica se evidencia en la gráfica 1.

1 Las masacres, para evitar cambios de medición y utilización de múltiples fuentes para el mismo indicador, solo incluyen las con cuatro víctimas o más. Aunque los paramilitares eran responsables de la mayoría de masacres, las FARC-EP también cometieron al menos 240 de ellas.

Gráfica 1: Víctimas de secuestro entre 1996 y octubre de 2026



Fuente: MinDefensa y cifras del antiguo Programa de DDHH de Vicepresidencia.

La gráfica 1 muestra que desde 1996, Colombia sufría de niveles extremadamente altos de secuestro, que terminaron aumentando hasta su punto más alto en 2000. Como se mencionó anteriormente, de ahí disminuyen hasta su punto más bajo en 2009. Repuntan un poco con el Plan Renacer de las FARC-EP, que buscó revertir las tendencias de golpes a esa guerrilla y recuperarse, al menos parcialmente, después de siete años de derrotas estratégicas[2].

En el 2012, el año que empezaron las negociaciones, hubo 305 secuestros, cifra que baja a 207 en 2016 —una disminución del 32 por ciento— en parte por el compromiso de las FARC-EP de no realizar secuestros con fines económicos como parte de la negociación[3]. Los secuestros con fines más políticos siguieron durante esos años, lo cual, en el caso del secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate Mora en zona rural de Quibdó, Chocó en noviembre del 2014, puso a tambalear el proceso de negociación[4].

---

2 Corporación Nuevo Arco Iris. Abril 2010. La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC. *Arcanos* 15: pp. pp. 4-21.

3 José Antonio Sánchez. *BBC Mundo.* 26 de febrero de 2012. "Las FARC anuncian fin de los secuestros, Colombia pide más gestos de paz".
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/02/120226_colombia_farc_anuncio_sanchez_jrg

4 *El Tiempo*. 16 de noviembre del 2016. "El general Rubén Darío Alzate Mora fue secuestrado en Chocó".
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-14840497

El secuestro es un ejemplo de un indicador que tuvo "un tiempo de paz" después de la firma, pues siguió disminuyendo hasta su cifra más baja de 160 en 2021; de ahí volvió a subir, llegando a 701 casos en 2025, su número más alto desde 2006.

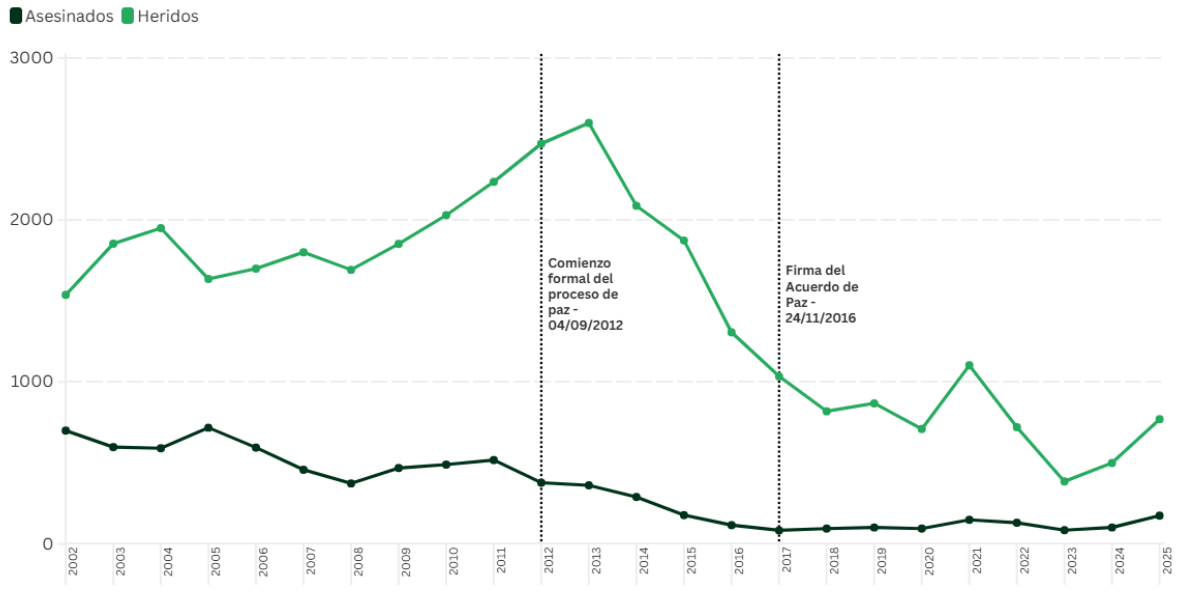
El caso del secuestro tiene un patrón común con otros indicadores: venía bajando desde antes de las negociaciones, pero su disminución durante estas no fue tan visiblemente notoria como con otras cifras.

Heridos y asesinados de la Fuerza Pública

Un aspecto del "nuevo ciclo de violencia" actual que comúnmente se señala como distinto al viejo ciclo de guerra con las FARC-EP es el decremento de confrontaciones entre el Estado y los grupos armados. Aunque no hay cifras únicas consolidadas, algunas implican que el Estado sigue enfrentando a los GAO pero estos no buscan atacar tanto a la Fuerza Pública ni a la Policía[5].

De todas maneras, la confrontación que sí existe sigue siendo mucho menos letal y dañina para la Fuerza Pública comparada con la que había frente a las FARC-EP previa a las negociaciones. Esto se ve en la gráfica 2.

Gráfica 2: Miembros de las Fuerza Pública asesinados y heridos entre 2002 y 2025.



Fuente: MinDefensa y cifras del antiguo Programa de DDHH de Vicepresidencia.

5 Naryi Vargas. Abril 2026. Del combate al control territorial: adaptar la política de seguridad a la violencia contemporánea en Colombia. *ICTJ.* https://www.ictj.org/sites/default/files/2026-04/ictj_report_colombia_combat-territorial-control_2026.pdf, p. 6.

El gráfico 2 muestra la cantidad de miembros de la Fuerza Pública asesinados y heridos en servicio por año. Se nota que empieza una disminución sostenida en el 2005, cuando las acciones militares más letales de las FARC-EP en efecto paran. La guerrilla implementa su repliegue estratégico y es en 2009 y 2010 que aumentan otra vez los asesinados de la Fuerza Pública por el Plan Renacer de las FARC-EP[6].

Cuando empiezan las negociaciones en el 2012, hubo 377 muertes de miembros de la Fuerza Pública, casi igual que unos años anteriores, en el 2008, cuando hubo 373. Para el 2016, la cifra de miembros de la Fuerza Pública asesinados en servicio fue de 115, una disminución del 69 por ciento respecto al inicio de la negociación. Esta fue útil en desescalar el conflicto entre el Estado y la guerrilla, como se pretendió con varias medidas tomadas durante los diálogos, tanto por las FARC-EP unilateralmente como por ambas partes[7].

Los heridos de la Fuerza Pública tienen otra dinámica. Mientras los asesinados iban disminuyendo en general durante el gobierno de Uribe, los heridos se mantienen y luego empiezan a aumentar entre el 2008 y el 2013. Las acciones de las FARC-EP siguieron teniendo efectos importantes, pero eran cada vez menos letales, pues la guerrilla empezó a usar más artefactos explosivos pequeños y minas antipersonales, por ejemplo, en vez de tomas armadas de bases militares completas.

En 2012, 2.471 miembros de la Fuerza Pública fueron heridos en servicio, número que subió hasta 2.599 en el 2013, para luego bajar a 1.306 en el 2016. Una disminución entre 2012 y 2016 de un 47 por ciento: otro ejemplo de cómo la guerra entre el Estado y las FARC-EP se desescaló durante las negociaciones.

La Fuerza Pública también vivió los beneficios de la paz por algunos años después de la firma del Acuerdo. La cantidad de miembros heridos en servicio siguió disminuyendo hasta el 2021. En ese año vuelve a subir, pero luego baja en el 2023, por los ceses bilaterales de la Paz Total. Los asesinados se mantienen básicamente en los mismos niveles históricamente bajos hasta el 2021, cuando también aumentan para luego decrementar en el 2023, gracias a los mismos ceses bilaterales. Desafortunadamente, ambas cifras han incrementado desde entonces.

---

6 Corporación Nuevo Arco Iris. Abril 2010. Op. cit.

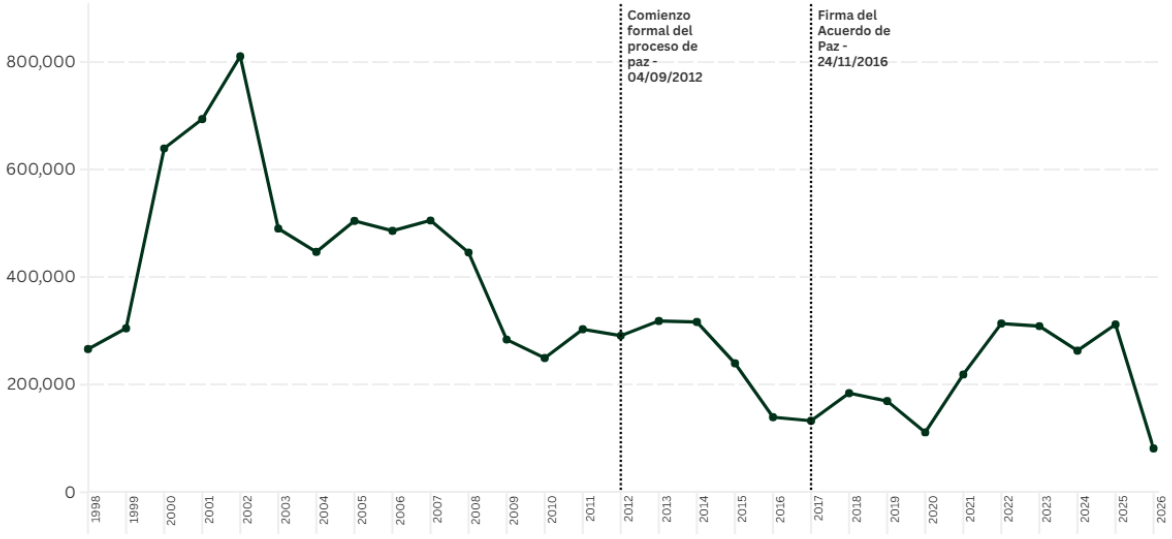
7 Las medidas más claras tomadas por ambas partes fueron las de desescalamiento anunciadas en julio de 2015, después de semanas de tensión fuerte en la mesa por acciones militares por parte de la guerrilla y la reacción violenta del gobierno. Gobierno de Colombia y las FARC-EP. 12 de julio del 2015. Comunicado Conjunto #55. https://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/anuncio-habana-victimas/comunicado-habana-victimas.pdf.

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado hizo parte de una estrategia de guerra para vaciar los territorios de su población y quitarle el supuesto apoyo a los grupos armados. Principalmente fue utilizado por los paramilitares, pero las guerrillas también fueron responsables del desplazamiento de miles de personas y comunidades completas. El desplazamiento forzado venía ya en bajada al momento de la negociación con las FARC-EP, pero se profundiza su disminución durante las negociaciones. El proceso en sí sirvió para decrementar esta afectación en la población civil.

Según las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el desplazamiento forzado se sufría en niveles extremadamente altos a finales de los años 90. Con la expansión paramilitar, las cifras aumentan hasta más de 800.000 víctimas en un solo año en el 2002. De ahí se evidencia que la cifra baja drásticamente en pocos años, y luego se mantienen en esos niveles, para luego tener otra disminución rápida y otros años de mantenerse, como se ve en la gráfica 3.

Gráfica 3: Víctimas de desplazamiento forzado entre 1998 y octubre de 2026.



Fuente: Cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV).

La primera disminución rápida fue entre 2002 y 2004 —de 810.000 víctimas a 446.900— probablemente por el proceso de desmovilización con las AUC, que no acabó con la violencia

según varios indicadores pero por lo menos ralentizó su proceso de expansión, parte de la cual el desplazamiento forzado era estratégico. De este punto, los niveles se mantienen básicamente iguales hasta el 2008, cuando hubo 445.000 víctimas.

Al comienzo de las negociaciones con las FARC, en 2012, el número de víctimas de desplazamiento fue de 291.100. La cifra había alcanzado un punto bajo en 2010, cuando se registraron 249.500 víctimas, pero luego repuntó en 2011. Durante los años de negociación, la disminución en las cifras de desplazados empieza en 2015 y registra su punto más bajo en 2016, con 139.510 víctimas ese año. Entre el inicio de los diálogos y la firma del Acuerdo, la disminución fue del 52 por ciento. Al ponerle fin efectivo a la confrontación entre el Estado y las FARC-EP, incluso antes de la firma del Acuerdo, el desplazamiento forzado disminuyó.

Este indicador también refleja una "ventana de la paz" entre la firma y el 2021, cuando las cifras de desplazamientos forzados vuelven a subir por los enfrentamientos entre diferentes grupos armados ilegales en el país. En 2026, se ve otra disminución que se puede deber a que no se ha acabado el año, aunque probablemente la cifra terminará en los mismos niveles del 2020.

Cabe señalar que el desplazamiento forzado ha cambiado cualitativamente en los últimos años. Ya no es resultado de una estrategia específica de guerra —quizá la excepción sería su uso por parte del ELN en Catatumbo en su guerra contra las disidencias de las FARC— ni se busca desplazar a comunidades completas estratégicamente. Es mucho más común que se de como una medida preventiva que busca evitar daños por parte de la población civil cuando dos grupos armados se enfrentan en un territorio.

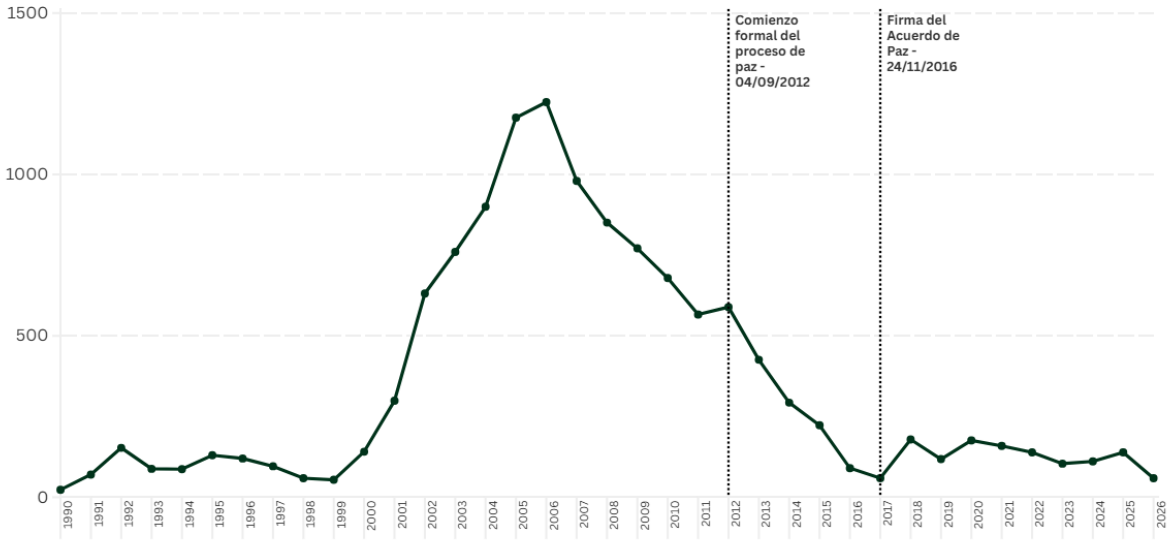
Adicionalmente, el confinamiento de comunidades ocurre hoy en día como una dupla del desplazamiento forzado, y frecuentemente como reacción a confrontaciones entre grupos armados. Esta cifra no fue incluida porque su registro previo al 2015 fue en efecto nulo, lo cual hace que el análisis de sus dinámicas previas, durante y después del proceso y Acuerdo de Paz sea imposible.

Víctimas de minas antipersonales (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI)

Colombia, lastimosamente, ganó la fama de ser el segundo país en el mundo en víctimas de MAP y MUSE durante sus décadas de guerra, en términos de víctimas totales. Las FARC-EP aumentaron su uso como una estrategia de defensa frente a las ofensivas de la Fuerza Pública que empezaron durante el gobierno de Uribe, especialmente frente al Plan Patriota y el comienzo de la erradicación manual de cultivos de coca; ambos empezaron formalmente en el 2005. Era común que colocaran

minas antipersonal después de los combates para frenar el avance físico de las tropas hacia sus posiciones.

Gráfica 4: Víctimas de minas antipersonal (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefacto explosivo improvisado (AEI) 1990 - julio 2026



Fuente: Dirección Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) - Presidencia

Esta dinámica se ve claramente en la cantidad de víctimas de estas en el gráfico 4. Las cifras empiezan a subir realmente desde el 2000, pero hay un salto significativo entre el 2001 y el 2002 —de 299 a 631— lo cual refleja esta primera reacción a la ofensiva estatal por parte de la guerrilla. Sigue aumentando hasta el 2006, los ajustes de la Fuerza Pública para evitar ser afectada por estas armas.

En el 2012, hubo un pequeño aumento a 589 víctimas, pero ya en el 2016, este número cayó hasta 90 víctimas - un decremento del 85 por ciento. El año de la dejación de armas de las FARC-EP, en 2017, hubo 59.

El decremento de víctimas de las MAP y MUSE fue importante en términos de miembros de la Fuerza Pública, pero también de la población civil, quien, a través de los años terminó cada vez más afectada por este flagelo. En este caso, entonces, el proceso sirvió para desescalar el conflicto entre el Estado y la guerrilla, y también disminuir la afectación de la población civil.

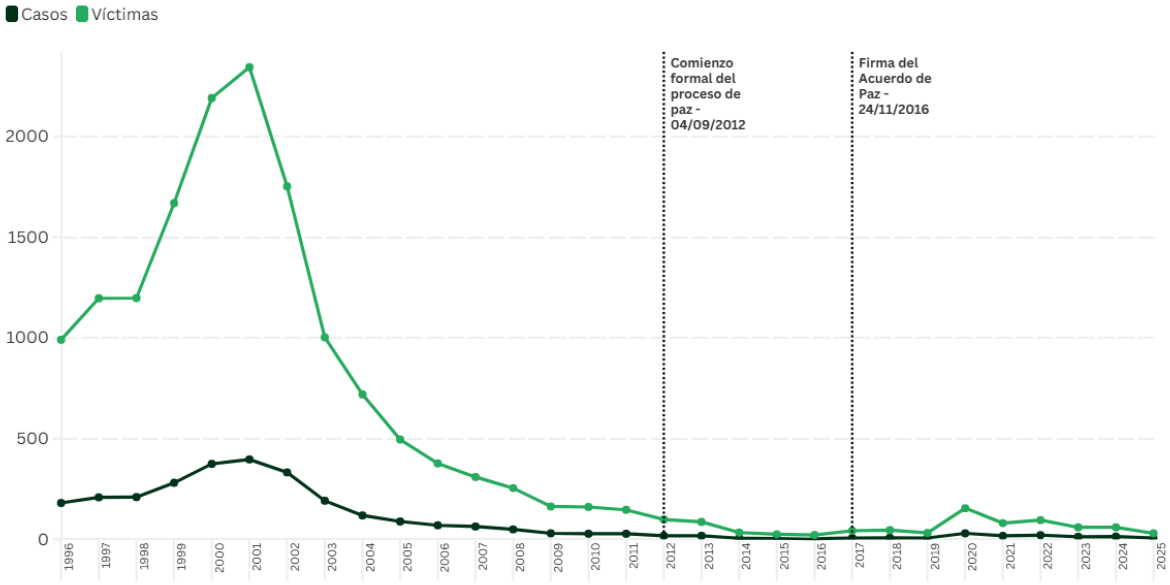
Desafortunadamente, desde el 2017, la cantidad de víctimas de MAP y MUSE no ha estado por debajo de los niveles registrados en el 2015.

Masacres

Las masacres, igual que el desplazamiento forzado, hacían parte principalmente de la estrategia paramilitar en su expansión. Igual, las FARC-EP cometieron al menos 238, muchas en respuesta a la ofensiva de las AUC[8], como la de La Gabarra en 2004, cuando esta guerrilla asesinó a 34 personas[9]. Sin embargo, en al menos algunas regiones del país, empezaron a cometerlas cada vez menos después de la desmovilización paramilitar, cuando su perspectiva de la amenaza principal en su contra se enfocó en la Fuerza Pública y su capacidad de infiltrar a la guerrilla[10].

Esta dinámica se ve en el gráfico 5.

Gráfica 5: Casos y víctimas de masacres de 1996 a 2025.



Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

8 *¡Basta Ya!* 2013. Centro Nacional de Memoria Histórica. https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf, p. 48.

9 Masacre de la Gabarra, Junio de 2004. 14 de octubre del 2019. *Rutas del Conflicto*. https://rutasdelconflicto.com/masacres/la-gabarra-junio-2004.

10 Jonsson, Michael y Johnson, Kyle. 2013. "The Drug Wars of Putumayo – Illicit Markets, Non-State Armed Competition and Repression of Civilians in Colombia's Southern Border Region." Presentado el 19 de noviembre de 2013, en The Latin American Research Seminar, organizado por Stockholm University Institute of Latin America Studies.

La cantidad y víctimas de las masacres llegan a su punto más alto en el 2001, cuando empezaron a bajar por la desmovilización paramilitar y la ralentización de su expansión durante este proceso. La disminución sigue después del 2006 porque las FARC-EP, al menos en algunas zonas del país, cambiaron su percepción de la amenaza principal en su contra. Cuando los paramilitares las atacaban, creían que estos se escondían entre los civiles y, por ende, empezaron a atacar más a la población civil. Cuando la Fuerza Pública empezó a golpear fuertemente a la guerrilla, esta dejó de atacar tanto a los civiles a través de las masacres[11].

Nunca llegaron a cero, de todas formas. En el 2012, cuando empezaron las negociaciones, hubo 18 masacres con 99 víctimas. Para el 2016, se registraron solo 4 con 22 víctimas. Fue una disminución de al menos 77 por ciento tanto en los casos como en las víctimas. Sin embargo, desde entonces, la cantidad de masacres ha venido en aumento, independientemente de si se mide con un mínimo de 4 víctimas, o de 3.

Las masacres de hoy en día no son como las anteriores. Primero, tienen en promedio menos víctimas: en el 2001, las 397 masacres tuvieron 2.344 víctimas, en promedio 5,9 víctimas por caso; en 2025, hubo 7 con 30 víctimas, alrededor de 4,25 en promedio, según la medida de al menos 4 víctimas.

Segundo, las masacres previamente fueron aún más públicas: a menudo con toda una comunidad reunida que estaba forzada a ver el asesinato de las víctimas, frecuentemente con mucha sevicia y crueldad. Hoy en día, es común que los cadáveres de las víctimas son dejados a la vista de la población civil, pero su asesinato no.

Tercero, antes las masacres buscaban desplazar una comunidad (muchas veces completa) y establecer el control militar y social sobre ella. Había un elemento de aleatoriedad a la violencia para que nadie se sintiera seguro, mientras al mismo tiempo, se buscaba asesinar personas específicamente acusadas de trabajar por el grupo armado enemigo. Hoy en día, las masacres son menos indiscriminadas y a menudo buscan castigar a unas personas específicas, sin buscar desplazar a una comunidad completa.

Conclusiones

Las cifras presentadas acá muestran que el proceso de negociación con las FARC-EP sirvió para seguir disminuyendo varios indicadores relacionados con la guerra entre el Estado y esta guerrilla, y

11 Jonsson, Michael y Johnson, Kyle. 2013. Op. cit.

su afectación sobre la población civil. El análisis de la evolución de estos indicadores mina el argumento del actual gobierno de que este Acuerdo "no es un modelo" por las dinámicas de violencia después de su firma, pues se muestra que incluso durante el proceso en sí, la violencia decrementó.

Además, la idea de que es el Acuerdo en sí lo que causa la situación de conflicto armado y afectación en que estamos hoy en día —como el gobierno de De La Espriella ha insinuado y algunos funcionarios del gobierno de Petro afirmaban— queda con menos sustento. Es difícil imaginar un escenario donde el Acuerdo sea la causa de los aumentos en la violencia después de la firma, mientras durante la negociación en realidad bajó.

El Acuerdo de Paz del 2016 no solamente buscó ponerle fin al conflicto armado con las FARC-EP, sino también abordar varias de las causas que lo originaron y lo mantuvieron. Aunque es difícil argumentar con seguridad que con una implementación perfecta se hubiera evitado la situación en la que se encuentra Colombia hoy en día, es probable que, al menos, hubiera mitigado su gravedad.

Este análisis muestra otros puntos importantes para tener en cuenta. Las disminuciones registradas durante el proceso de negociación de algunas cifras no responden únicamente a la negociación. La entonces política de seguridad fue bastante efectiva contra las FARC-EP, antes y durante el proceso, dado que no hubo ceses bilaterales ni medidas formales de desescalamiento bilaterales hasta julio del 2015. Esto resalta la importancia del balance y la relación simbiótica entre paz y seguridad.

El reto ahora es tener una política de seguridad realmente capaz de debilitar a los grupos armados organizados y criminales que operan en el país hoy en día. La política de la época previa y durante la negociación funcionaba contra las FARC-EP de ese momento. Hoy en día, los grupos armados son distintos, con metas diferentes y formas de operar propias; lo que funcionó contra las FARC-EP, en términos de la política de seguridad, no va a funcionar tan bien en la actualidad.

Cabe resaltar que la decisión de "seguir la guerra como si no hubiera negociación, y negociar como si no estuvieran en guerra" fue parte del diseño del proceso. Funcionó imperfectamente pero mostró que las opciones en términos de reducción de la violencia van más allá de los ceses bilaterales, formales o informales. Estos son muy importantes, sin duda, pero es importante considerar otras posibilidades.

Es difícil pensar que replicar exactamente el diseño del proceso en La Habana funcionaría hoy para negociar con cualquier grupo armado. El contexto ha cambiado y estos también. Sin embargo, no se debería ignorar del todo los efectos del proceso de negociación en sí en la violencia entre 2012 y 2016, e incluso en 2017, cuando las FARC-EP dejaron las armas. Este tema se analizará en otro documento publicado por CORE como parte de su análisis frente a los 10 años del Acuerdo de Paz.

Cabe recordar que el Acuerdo no incluyó la política de seguridad, y esta ha sido la responsabilidad de todos los gobiernos que siguieron —y seguirán— después de su firma. En el gobierno de Santos, incluso, hubo el Plan Horus y el Plan Victoria, por ejemplo, a través de los cuales la Fuerza Pública buscaba "llenar los espacios" dejados por las FARC-EP; el Plan de Respuesta Rápida buscaba hacer lo mismo desde el lado "civil" del Estado. Ninguno fue implementado adecuadamente.

La decisión política de los gobiernos de Duque y de Petro de implementar de forma limitada el Acuerdo de Paz significaba que sus propias políticas de paz y seguridad tuvieron un mayor peso frente a mantener los niveles de violencia registrados a la firma del Acuerdo, ya que no contemplaban aprovechar todas las herramientas planteadas dentro de lo pactado en el 2016. Al optar por no usarlas, tenían que reemplazarlas con otras, lo cual no ocurrió ni tan exitosa ni tan claramente.

Por eso, echarle al Acuerdo la culpa por la situación en que se encuentra el país en términos de inseguridad tiene problemas lógicos claros, es una forma conveniente de evitar reconocer responsabilidades propias de cada gobierno e ignora cómo estaba el país en términos de conflicto armado cuando se firmó la paz ya hace 10 años.